

DEBATE O EMBATE A LA HISTORIA

David Ibarra

2 de junio del 2000

A juzgar por las declaraciones de muchos de los aspirantes de oposición a la presidencia de la República, la historia nacional resulta dividida falsamente en dos períodos. Uno, de ignominia que abarca setenta años de atraso, corrupción y autoritarismo; otro, el del entierro del PRI, a partir del dos de julio de este año, en el que brillarán deslumbrantes democracia, orden y progreso.

Por su parte, el candidato priista un tanto forzadamente parece concebir la historia en dos etapas distintas: hasta 1982, privaron desaciertos populistas que luego se ha buscado corregir y, a la par, alcanzar la inserción liberalizadora de la economía nacional en los mercados globalizados. Acaso aquí están presentes las tensiones inevitables entre las tesis que buscan prolongarse del gobierno saliente y las necesidades electorales asociadas a las insatisfacciones de los miembros de la sociedad civil que convergerán en las urnas.

Rehacer a capricho la historia es desconocer o menospreciar los esfuerzos invertidos por los mexicanos y sus gobiernos a lo largo de décadas; es desconocer el armazón institucional y de valores que en grado importante definen, para bien o para mal, la viabilidad de las políticas y de los cambios que se desean implantar; es situarse en el dominio de la utopía, en que todo se puede ofrecer a costos deleznable, aunque luego venga la resaca de la desilusión ciudadana; es preferir la democracia formal a la democracia real.

Razones de pragmática electoral no justifican satanizar siete décadas, magnificar los errores y atribuirlos todos al mal gobierno. Ahí están logros inocultables que no cabe descalificar, sin descalificar a toda la sociedad mexicana. Por las mismas razones, tampoco es válido atribuir todo lo bueno a las políticas recientes con olvido de los antecedentes y circunstancias en que descansan. Los frutos del desarrollo económico o político, lo mismo que la capacidad de instrumentar cambios, no surgen de la nada, ni pueden aparecer milagrosamente. En lo esencial, son resultado de una penosa tarea acumulativa de aciertos, errores, rectificaciones, inseparables de la historia evolutiva anterior.

En esos setenta menospreciados años, México ha pasado de ser una economía rural, casi de subsistencia, a constituirse en una nación de industrialización intermedia que ya aborda con éxito los mercados foráneos. La producción real entre 1930 y 1980 se multiplicó dieciséis veces con una tasa media anual de 5.7%, dando origen al período más prolongado y al auge más intenso de la vida independiente del país. En ese lapso, la población se cuadruplicó, no obstante lo cual, el ingreso por habitante creció otras cuatro veces.

En ese medio siglo, el número de estudiantes en todos los niveles educativos pasó de 1.4 millones a más de 20 millones. El analfabetismo se redujo del 61.5% al 9.5% de la población de 10 años y más. La mortalidad infantil se redujo de 131.6 a 38.8 por cada mil niños nacidos vivos. Y la esperanza de vida al nacer se elevó de 37 a 65 años. El empleo productivo paso de 5 a 20 millones de trabajadores.

Ese puñado de datos revelan la voluntad de una sociedad esencialmente armónica por avanzar con éxito en el camino de la modernización. Más aún revelan la capacidad

de sociedad y gobierno por crear las instituciones comunitarias más apropiadas al patrón de desarrollo predominante en esas décadas.

Baste mencionar aquí a las instituciones relacionadas con la reforma agraria, la expropiación petrolera, los derechos laborales, la industrialización o las que hacen el mejoramiento de los derechos civiles y políticos, la formación de clases medias amplias y vigorosas. En términos menos generales, en la edificación nacional destacan hitos colectivos que culminan con la creación del Seguro Social, el ISSSTE y el Infonavit en materia social; en el ámbito económico está el surgimiento de las tres más grandes empresas nacionales (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México) y la formación de un sistema financiero propio; y en el dominio político, el impulso a la sindicalización, el voto a la mujer, el régimen de diputados de partido y el fortalecimiento de organizaciones empresariales.

Hay pues mucho de que enorgullecerse, como también, críticas válidas en ese medio siglo de nuestra historia. Sin duda, hubieron rezagos en materia de justicia distributiva; el autoritarismo y el populismo crearán una secuela de escollos a la modernización política; el patrimonialismo, los excesos del proteccionismo sesgaron la asignación de los recursos, enriquecieron a algunos y nos prepararon mal para la integración de los mercados mundiales. Con todo, el balance es positivo. Pocos países han conjugado paz social y crecimiento alto, sostenido, durante cinco décadas consecutivas.

Lo que ocurrió a partir de los años ochenta es otra historia poco comprendida, adulterada frecuentemente por el juego de intereses políticos o económicos encontrados. Imperativos, acaso insoslayables forzaron la adaptación de nuestro país a las normas o sistemas que rigen el novísimo orden económico internacional de mercados abiertos e intervención estatal en retirada. Con el capital político acumulado, desde el gobierno se

impulsa un proceso de transición que trastoca a fondo el modo anterior de hacer economía y hacer política: se quiere reemplazar el liderazgo protagónico del Estado por la acción de la empresa privada; sustituir a la demanda interna por la demanda de mercados internacionales, como motor orientador del desarrollo; alterar la estructura de los precios en favor de exportadores e importadores, cuando antes beneficiaba al grueso de los productores nacionales; privatizar empresas públicas con el doble propósito de retirar al Estado de la producción, obtener ingresos fiscales extraordinarios con la esperanza —no siempre cumplida— de mejorar la eficiencia; y hacer de la lucha antiinflacionaria el objetivo social a perseguir en cualquier circunstancia.

También en la reconfiguración del poder político se producen mudanzas notorias. Se alienta el fortalecimiento de los partidos políticos y la modernización de las normas electorales; se abren compuertas a la vigencia y defensa de los derechos humanos; se otorga mayor peso a ciertos grupos empresariales nacionales y extranjeros y, correlativamente, se hace perder fuerza a las organizaciones obreras, así como a los pequeños y medianos negocios; se fortalecen los derechos de propiedad y las libertades del hombre económico, mientras se aplaza el avance de los derechos positivos, de las garantías sociales. La alternancia política se postula —con razón— como prueba del ejercicio efectivo de la democracia, aunque también sirva para dar salida, sin atender del todo, a demandas sociales sentidas.

El signo de los cambios, aparte de ser o querer ser ver como inevitable, tiene elementos positivos o negativos según el punto de vista o el horizonte temporal que se adopte. En cualquier caso, se altera en lo fundamental la composición de los grupos de ganadores y perdedores con respecto a la organización social anterior. Ganan los agentes vinculados al comercio exterior, pocos en número, y pierde el grueso de los productores

del mercado interno; cede terreno el Estado en cuanto a productor y lo gana las grandes empresas nacionales o extranjeras; el grueso de los trabajadores ven disminuida su participación en el ingreso, mientras medran ahorradores y ciertos inversionistas. En suma, tienen lugar alteraciones hondas en la distribución del producto, tanto como del poder político.

Como ocurre en toda transición profunda, el ritmo de desarrollo económico se torna frágil, inestable, se debilita, así como la capacidad de los segmentos modernos de las economías de multiplicar los empleos. Se acentúa la concentración del ingreso, la pobreza se difunde, hay inestabilidades y surgen fenómenos de inseguridad y descomposición social interna de los países.

En el periodo que media entre 1940 y 1980, la población creció a razón del 3.1% anual, el producto interno al 6.5% y el ingreso per cápita al 3.3%. En contraste, en los últimos veinte años (1980-2000), pese al descenso en la tasa de expansión demográfica (2%), el ensanchamiento del producto, dentro de marcadas fluctuaciones, sólo promedia el 2.4%, mientras el ingreso per cápita casi se estanca (0.35% de elevación anual). Si se divide el producto entre el personal ocupado, la productividad sube poco más del 3% cada año en el primer periodo y apenas 0.6%, en el más reciente. El pasado no resulta tan condenable como lo pintan.

Los efectos de la pérdida del dinamismo económico suelen pasar desapercibidos, pero forman el trasfondo de los problemas que nos aquejan y dividen. Si la tasa de crecimiento de la economía entre 1940 y 1980 se hubiese mantenido, el producto sería hoy más de dos veces mayor y el ingreso por habitante 1.5 veces más grande. En ese escenario los apuros fiscales serían menores, mayores los empleos o la formación de capital humano y físico y, mucho menos difundida, la pobreza que ya aqueja a más del 40% de la población. Eso mismo habría atenuado los problemas de la concentración

desproporcionada de las cargas del ajuste económico en los estratos más débiles de la población con sus secuelas magnificadoras en términos de inseguridad y corrupción.

Los apremios de buscar nuestra adaptación al nuevo orden internacional, han llevado a descuidar los acomodos internos básicos. Así lo atestigua la ruptura de los pactos sociales, la debacle de los pequeños y medianos negocios, los desajustes del mercado laboral o el ascenso de las desigualdades distributivas. Con todo, hay avances en la transición que no cabría echar por la borda. Ahí están los sólidos nexos de asociación con el nuevo mundo globalizado, el desmantelamiento de regulaciones excesivas, el fortalecimiento de los partidos políticos y la autonomía de las instituciones electorales.

En suma, es palpable la distancia que separa a la discusión política dominante entre los candidatos de las verdaderas circunstancias en que se encuentra el país. Falsear hechos, negar la historia, combatir con diatribas, en vez de planteamientos, sólo puede conducir a dividirnos, disolver los amarres de la identidad nacional y quizás, a un cambio vacío o indeseable.

México necesita vitalmente unir fuerzas e ideas en temas impostergables. ¿Cómo finiquitar prontamente la transición?, ¿cómo imprimir rostro humano al cambio económico?, ¿cómo recuperar la capacidad de crecer?, ¿cómo articular ordenadamente las demandas sociales?, ¿cuáles son nuestras verdaderas fortalezas y limitaciones?. Ojalá en esa vertiente se orientaran campañas y debates o, si ya fuese demasiado tarde, los programas de gobierno del presidente que resulte electo.